

sa al Juzgado de su origen para que cancele la fianza otorgada á favor de Juliana Chavez, y verificada la cancelacion, remita de nuevo el proceso á esta Superioridad.

Así por unanimidad lo proveyeron los CC. Presidente y Magistrados que forman la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, funjiendo como de Circuito y firmaron.—*Manuel Posada.*—*Miguel Castellanos Sanchez.*—*Pablo M. Rivera.*—*Eduardo J. Arteaga.*—*José María Herrera y Zavala.*—*Cirio P. de Tagle,* secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general de la Nacion dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de México, se siguió causa contra Juliana Chavez por circulacion de moneda falsa. Practicada la averiguacion, y no resultando de ella justificados el delito ni la culpabilidad de la acusada, el Juez la absolvió del cargo y la mandó poner en libertad bajo de fianza. Revisada esta sentencia por la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito, que funciona como de Circuito, la confirmó en todas sus partes y mandó cancelar la fianza. La sentencia ha causado, pues, ejecutoria; y como los procedimientos son arreglados á las leyes, el Procurador general pide se dé por revisada la causa.

México, Junio trece de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Guzman.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Como parece al C. Procurador general

se ha por revisada la presente causa, y no habiendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen por conducto del Tribunal de Circuito respectivo y archívese á su vez el Toca.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogaszon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Junio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Alejo Gomez Figuarte,* oficial 2º y archivero.

CIVIL.

Autos seguidos ante el Juez de Distrito de Guanajuato por el C. Lic. Joaquín Chico, solicitando se promoviera la competencia al Juez de 1ª instancia de Leon para conocer del juicio promovido por infraccion de la ley de papel sellado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL DE DISTRITO.

El Promotor fiscal dice: que al contestar la notificacion que se le hace de 11 del actual, no tiene que decir mas, sino que reproduce lo que tiene expuesto en su escrito de 4 de Marzo próximo pasado y en su contestacion de 7 del mismo mes.

El art. 61 de la ley de 14 de Febrero de 1856 es verdad que concede el uso de la facultad coactiva á cualquiera autoridad que está en el caso de reclamar las multas causadas por el no uso del papel sellado en los documentos que corresponda; pero es incuestionable que al hacer uso de esta facultad, deben las expresadas autoridades sujetarse muy estrictamente á las prescripciones de la ley relativa; en tal virtud, luego que el negocio se haga contencioso y esté en el caso determinado por el art. 13

de la ley de 20 de Enero de 1837, debe conocer de él el Juez hacienda, y sobre todo no ser sentenciado sino por este, único competente para decidir la cuestión, por mas que sea otro Juez el que hizo uso de la facultad coactiva para reclamar la multa.

El certificado que la parte del C. Joaquín Gonzalez tiene presentado y corre en estos autos á fojas 12, prueba de una manera indudable que el Juez de Leon no se ha limitado á practicar en el negocio las primitivas diligencias judiciales, sino que se ha arrogado una jurisdicción que la ley le deniega, empezando este abuso desde que mandó citar para sentencia.

El Promotor, por último, no ve el peligro que pueda haber en iniciar la competencia que se solicita, pues á mas de que en su opinión procede lisa y legalmente, puede este Juzgado en cualquier tiempo desistir de ella, como lo dice el promovente, y dejar sin efecto la iniciación de la competencia, siempre que aparezcan razones en que pueda fundarse.

Con fundamento de lo expuesto, el Promotor concluye pidiendo al Juzgado se sirva hacer conforme tiene pedido en el escrito de 4 de Marzo que dejo citado.

Guanajuato, Abril catorce de mil ochocientos setenta y uno.—(firmado).—Zenon J. de Velasco.

Sentencia del Juez de Distrito.

Guanajuato, veinte de Abril de mil ochocientos setenta y uno.

Siendo uno de los efectos de la sentencia extinguir la jurisdicción del Juez en cuanto á los procedimientos combinados; por cuya razón carecería de objeto la competencia que pretende la parte de D. Joaquín Gonzalez; apareciendo además por el testimonio de fojas 12 frente á la 14 frente, que el expediente relativo á la multa que se cobra á dicho señor forma un incidente de los autos ejecutivos que sobre pesos tiene en-

tablado el mismo Gonzalez contra Don Gaspar Martinez, en cuya virtud el Juez 1º de Letras de Leon es competente para conocer de la multa, como lo es para conocer de los autos indicados, por que lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal, y no estando acreditado en las presentes diligencias que el promovente haya declinado jurisdicción en tiempo oportuno, por lo cual es de presumirse que consintió, á lo menos tácitamente, con alguno ó algunos actos que inducen proroga de jurisdicción, en someterse á la de un juez incompetente, en caso de que lo haya sido el 1º de Letras de Leon; es de declararse y se declara: que no procede el recurso de competencia que ha promovido en estas actuaciones el apoderado de D. Joaquín Gonzalez. Notifíquesele este auto, haciendo otro tanto con el C. Promotor fiscal.

Así el C. Juez de Distrito, lo decretó y firmó; doy fé.—(firmados).—Torres.—Luis A. Medina.

Pedimento del ciudadano Promotor fiscal de Circuito.

El Promotor fiscal dice:

Que en 28 de Febrero del año corriente se presentó ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato el C. Lic. Joaquín Chico en representación de D. Joaquín Gonzales, manifestando: que este demandó ejecutivamente á D. Gaspar Martinez ante el Juez 1º de letras de la ciudad de Leon, el saldo del pago de una cuenta cuya copia presentó en papel simple porque no lo había del sellado correspondiente en las oficinas de su expendio el día que era necesario exhibir dicha cuenta. El Juez despachó la ejecución previniendo que se repusiera el papel, como en efecto se repuso por el Sr. Gonzalez. Durante el juicio, el Administrador de papel sellado de Leon dirigió al Juez de los autos una comunicación oficial diciéndole: que se

le habia denunciado que el Sr. Gonzalez cobraba judicialmente una cuenta en papel simple, y que podia le diera conocimiento de ella para obrar como lo exigieran los derechos del Erario federal. El Juez mandó sacar testimonio de lo conducente y lo remitió á aquel funcionario, quien usando de la facultad economico-coactiva requirió de pago al Sr. Gonzalez por la cantidad de dos mil quinientos pesos importe de la multa en que incurrió. Se opuso éste y en consecuencia se volvió contenciosa la exaccion de la multa, sobre la que está conociendo como incidente del juicio principal el C. Juez 1º de letras de Leon. En vista de lo cual y fundado en la fraccion 1ª del artículo 97 de la Constitucion federal, el referido C. Lic. D. Joaquin Chico solicitó que el Juzgado de Distrito iniciase formal competencia al Juzgado 1º de Leon sobre el conocimiento del incidente precitado. Por auto de 4 de Marzo último el C. Juez de Distrito de Guanajuato declaró: que siendo competentes los Jueces del Estado para conocer de los negocios concernientes á la Hacienda federal, (siendo aquellos foráneos) hasta ponerlos en estado de sentencia, segun lo previene el artículo 37 de la ley de 22 de Mayo de 1834, y no constando por lo mismo que el Juez 1º de letras de Leon se haya excedido en el ejercicio de sus atribuciones, no está en el caso de iniciar competencia al expresado funcionario sobre el conocimiento de los autos que tratan de la indicada multa.

Despues de varias gestiones del interesado y del Promotor fiscal, por auto de 20 de Abril de 1871 volvió á declarar el C. Juez de Distrito "que no procede el recurso de competencia que ha promovido en estas actuaciones el apoderado de D. Joaquin Gonzalez" De cuya resolucio fué admitida la alzada en ambos efectos que interpusieron el C. Promotor fiscal y el Lic. D. Joaquin Chico; habiéndose remitido los autos á éste Tribunal.

Los son los medios legales que tienen los litigantes para hacer que se decida una con-

tienda de jurisdiccion. Es el primero, la declinatoria opuesta como excepcion ante el Juez que conoce de un negocio; y el segundo, la excitativa hecha al Juez para que reclame el conocimiento de los autos, promoviendo el recurso de competencia. En este caso los litigantes no tienen otro derecho que el de urgir al Juez que estiman competente, para que reclame su jurisdiccion. En el debate formado en consecuencia, los Jueces son las partes que compiten, y no tienen que intervenir otros tribunales que los Juzgados que se disputan la jurisdiccion, y el superior á quien la ley otorga la facultad de dirimir la competencia, que en el caso seria la Suprema Corte de Justicia de la Nacion conforme al artículo 99 de la Constitucion.

La ley de 19 de Abril de 1813 reconoce en los Jueces el pleno derecho de estimar si tienen jurisdiccion en un negocio ó carecen de ella para el efecto de iniciar ó no una competencia ó de insistir ó no en la iniciada, con vista de los fundamentos alegados por el otro Juez competidor. Si abusaren de esta facultad, deja abierto contra ellos el recurso de responsabilidad. No puede por lo mismo obligarse á un Juez á que sostenga contra su parecer una competencia cuando si lo hace sin derecho, el Tribunal á quien corresponde dirimirla tiene que condenarlo en las costas del recurso, y aun imponerle otras penas segun el juicio que forme de su temeridad (fraccion 7ª artículo 1º capítulo 1º del decreto de 24 de Marzo de 1813.)

Hay tambien que tener en cuenta, que la ley niega la revision de los autos definitivos que dirimen las competencias, (artículo 29 de la ley 14 de Febrero de 1826) y no pudiendo admitirse contra un auto interlocutorio remedio negado contra el definitivo, no debe ser revisable ni por lo mismo apelable, el auto en que un Juez se niega á iniciar una competencia ó á insistir en la ya iniciada, aun cuando ese auto tuviese el carácter de una resolucio de la autori-

dad y no el que realmente tiene de simple declaracion de voluntad de una de las partes que estiman no tener derecho de poner en ejercicio determinada pretension. Por lo demás, tocando el conocimiento de la competencia que nos ocupa á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, por tratarse de un Tribunal comun y otro de la federacion, el Tribunal de Circuito como de apelacion de uno de los competidores, careciendo de jurisdiccion para determinar sobre lo principal, carece indudablemente para decidir sus incidentes.

Las competencias han sido establecidas segun nuestra legislacion por causa del orden público, para evitar que los jueces, invadiendo mutuamente los unos la jurisdiccion de los otros, entorpezcan y hagan imposible la administracion de justicia y ocasionen tal vez mayores trastornos; y no por causa del interés privado que puedan tener los particulares en ser juzgados por sus propios jueces, para atender á lo cual tienen su derecho expedito de declinar jurisdiccion, en cuyo caso solo son las partes interesadas que pueden apelar ó interponer toda clase de recursos, y al cual se refiere la ley 23 tit. 20 lib. 11 de la N. R. única disposicion legal en que pueda haberse fundado el C. Juez de Distrito al admitir la apelacion.

Aunque los autores modernos españoles dan otro carácter á las competencias y enseñan que por interés de las partes se deben admitir las apelaciones de autos semejantes al que nos ocupa, se fundan en leyes peculiares y expresas de su nacion, á que no debemos atender por ser posteriores á la época de nuestra emancipacion.

Por estas consideraciones el Promotor fiscal pide, se dé por fenecido este recurso, volviendo el expediente al Juzgado de su origen para que tenga su cumplimiento el auto de 20 de Abril último.

Querétaro, Mayo veintitres de mil ochocientos setenta y uno—(Firmado.)—*Luis Castañeda.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Querétaro, Mayo veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos estos autos seguidos ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Lic. Joaquin Chico, en representacion de D. Joaquin Gonzalez, solicitando iniciara aquel competencia por derecho propio al Juez de 1ª instancia de Leon, para conocer en la parte del expediente que este funcionario seguia en favor de Gonzalez sobre pago de la cantidad de dos mil quinientos pesos valor de la multa en que incurriera por haber presentado judicialmente un documento ó cuenta en papel simple, con cuyo motivo debia conocer el Juez federal con su jurisdiccion que atañe á los negocios de su especie, segun la fraccion 1ª y 2ª del art. 97 de la Constitucion federal de la República, máximo cuando que la pena ó multa es el resultado del art. 58 de la ley de 14 de Febrero de 1856, cuyos fondos que protejia, son pertenecientes al erario público federal.

Visto el auto de 4 de Marzo del presente año que negó iniciar la competencia con motivo de que los jueces ordinarios foráneos tienen facultad de practicar las primeras diligencias, consecuente con el art. 37 de la ley de 22 de Mayo de 1834; las razones aducidas por las partes, incluso el C. Promotor fiscal de 1ª instancia, que tambien coadyubó á que se iniciase la competencia; las pruebas de documentos tomados en testimonio de los autos seguidos en Leon, aducidos por el actor, probando la ingerencia y prosecucion del juicio hasta citar para sentencia y pronunciarla el Juez letrado en esa Ciudad en el negocio que seguia, con inclusion de la multa, sobre cuyo particular no tenia jurisdiccion, segun lo sostenido por las partes.

Visto el auto de 20 de Abril último resolutive final del funcionario de Guanajuato, insistiendo en la no interposicion de la competencia, en razon de que fallado en to-

das sus partes el negocio de Gonzalez con inclusion de la multa que motiva aquella, habia terminado la jurisdiccion del Juez de Leon que conoció en los autos, en cuanto á los procedimientos consumados, cuyo funcionario intervino en lo relativo á la multa reputándola como incidente de lo principal, relativo á los autos ejecutivos contra el C. Gaspar Martinez, á la vez que vistos todos los demás alegatos sobre el particular, así como los aducidos para la apelacion que se admitió por el Juez á quo, quedó ingerencia á este Tribunal para examinar en segunda instancia, poniendo en el punto de vista lo que constituye la competencia que motivó la presente actuacion, á qué autoridad corresponde su conocimiento en su caso, ó como Juez *ad quem*; visto lo alegado en esta instancia por el C. Lic. Joaquin R. Muñoz, á la vez que lo pedido por el C. Promotor fiscal de este Tribunal y todo lo demás conducente que ver convino, tiene que atenderse como precedente al fallo, los considerandos que se expresan á continuacion.

Primero: Que las competencias son de interés público, puesto que otorga garantías á las partes que litigan, á efecto que mediante los principios establecidos por las leyes que sirven de base ó precedente de aquellos, tengan los litigantes que ocurrir á sus jueces propios que los resuelvan sus cuestiones; mas sin que por ese derecho concedido para buen orden de proceder, faculte á aquellos para que entre sí ventilen negocios de competencia, salvo cuando hagan uso de la declinatoria de jurisdiccion considerándola como excepcion dilatoria ó incidente á la accion principal que dedujeran, que es distinto de lo que constituye la competencia, que es "la controversia ó disputa que se suscita entre dos ó mas jueces ó tribunales, sobre cuál de ellos deba conocer de cierta causa ó negocio."

Segundo: Que si bien los litigantes tienen derecho de excitar á los jueces para que inicien competencia, como lo ha hecho el C. Lic. Chico, apoyando el que le compitiera

aun con medios demostrativos, eso no constituye en sí la competencia que el Juez ha pedido ó no iniciar bajo su estrecha responsabilidad, teniendo en cuenta lo prevenido en la part. 7ª del art. 1º cap. 1º de la ley de 24 de Marzo de 1813.

Tercero: Que interpuesto y admitido el recurso de apelacion, tiene que resolverse bajo el aspecto que se considere, ya sea sin efecto, por no poderse obligar á los jueces á que intervengan en negocios que estiman les son estraños, ó ya considerando el derecho que tuviera la parte en haber instaurado y seguido aquel por el interés que le resultase, cuya resolucion y facultad de fallar "si un Juez de un Estado que compite ó se desiste de competir en materia de jurisdiccion con Juez de otro Estado, toca exclusivamente á la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion."

Cuarto: Que aunque en el presente negocio no se ha sostenido la competencia, por los funcionarios de Leon y Guanajuato, no puede hacerse declaratoria, con respecto á las razones que tuviera el Juez de Distrito para no instaurarla, en razon de carecer de la jurisdiccion al efecto, que es propia de la Corte Suprema, por lo dispuesto en el art. 99 de la Constitucion federal de la República, que le otorga facultad para conocer en lo principal con jurisdiccion intrinseca, trayendo por consecuencia precisa la facultad de conocer en los incidentes relativos á la competencia.

Quinto: Que no sería lógico ni consecuente al recurso interpuesto, resolver simplemente sobre la falta de jurisdiccion, por que entonces nada se diria sobre la legalidad ó ilegalidad de aquel, ni de las razones que lo motivaran, en las que se fundó la pretension del actor para pedir la ingerencia del Juez de 1ª instancia de Leon, por ser propia, segun alegó, del C. Juez de Distrito de Guanajuato, y por tratarse de un negocio de la Hacienda pública federal, segun se dijo en la parte expositiva, en cuyo caso es de necesidad la resolucion sobre el

particular que sirva de declaratoria al recurso interpuesto, y del caso no comprendido en la ley de 19 de Abril de 1813; pues aunque el personal del Tribunal ha formado opinion sobre el particular, sostenida por resoluciones superiores dictadas con anterioridad, no le es legal resolver el caso por las razones antes dichas, ó falta de competencia, ni de volver la actuacion al Juez inferior, por no dejar sin efecto el ocurso aducido, que se resolverá con acierto de un modo legal por la superioridad que le corresponde su conocimiento.

Por todo lo expuesto, de conformidad en parte con lo pedido por el C. Promotor fiscal y mediante los fundamentos expresados; fallo:

No es competente el personal del Tribunal para conocer en grado, del recurso de apelacion interpuesto y admitido por auto de 27 de Abril próximo pasado; y en consecuencia, remítase este expediente á la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia para su conocimiento, y previa citacion de las partes, las que tienen su derecho expedito para deducir en forma ante la superioridad, dentro de doce dias, término señalado para que llegue á su destino el expediente que se remitirá de parte: notifíquese y repónganse las fojas del sello quinto con las que corresponden. El C. Magistrado de Circuito, así lo decretó y firmó. Doy fé. (Firmados.)---*Aurelio Ramis Portugal.*---*Ramon Reynoso.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por el Lic. D. Francisco Romunillos por sí y en representacion de los Sres. Peña y O^a Diego Peña, Antonio Peña, Mateo Magaña y O^a y otros, contra el C. Tesorero general del Estado, que les exige el medio por ciento que impone el decreto núm. 119 de la Legislatura del mismo Estado, de 5 de Abril último, á todo capital y sueldo anual de mil pesos en adelante, con cuya disposicion dicen, se falla á lo mandado en la fraccion 2^a art. 31 de la Constitucion del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez:

El Promotor fiscal accidental dice: que está muy bien impuesto de que el presupuesto de ingresos del Estado, basta para cubrir el de egresos ordinarios, de antemano establecidos, y sobra mensualmente una cantidad muy considerable para crearse un fondo, á fin de atender á las circunstancias anómalas que con frecuencia han tenido lugar en varias poblaciones foráneas y aun edificar penitenciarías, establecer escuelas que no hay ni aun en Mocorito; construir caminos, fincar una casa para el palacio del Gobierno, que no la tiene, y por último, sin necesidad de apelar á la odiosa cantinela de contribuciones extraordinarias, que con cualquier frívolo pretexto, como el pequeño movimiento de Andrade, invocan los legisladores del Estado su consabido estribillo para estorcionar un poco y hacerse de recursos que se necesitan en la actual época de agitacion electoral, como lo dicen menos claro los preliminares del decreto 114 de dicha Legislatura que corre agregado á fojas 9 de este expediente.